

## RESOLUCION N. 00735

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas en la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que mediante oficio Radicado No. 2003ER31116 del 27 de octubre del 2003, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA hoy Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, solicita al señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, el cumplimiento en la presentación de los reportes periódicos del libro de operaciones al igual que la presentación de los permisos de importación “NO CITES”, salvoconductos originales de movilización y las copias de las facturas correspondientes que amparan la procedencia legal de los productos, que para el caso concreto, se trata de Chapilla de madera importada, razón por la cual, frente a la solicitud realizada con radicado No. 2004ER23878 esta Secretaría mediante oficio No. 2004EE14397 del 21 de julio de 2004, le niega la solicitud de certificación de registro y cumplimiento.

Que mediante radicado No. 2007ER22870 del 15 de agosto de 2007, la Oficina de Control Flora y Fauna de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, solicita al señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, para que en un término de ocho (8) días remita la siguiente información: inventario por especie de las existencias de Chapilla de la Industria y copia de los permisos expedidos por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; inventario por especie de los demás productos de la flora que se comercialicen con los correspondientes permisos de importación y la relación de las sedes con que cuenta la Industria y el Certificado de Cámara y Comercio respectivo.

Que por lo anterior, el señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, mediante raciado No. 2007ER35387 del 28 de agosto de 2007 señaló que no cuenta con el permiso de importación respectivo por desconocimiento en el tema y relaciona ocho (8) puntos de venta.

Que mediante radicado No. 2008ER23545 del 11 de junio de 2008, el señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, solicita certificación del libro de operaciones a la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, señalando que para la importación de una nueva Chapilla, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, exige dicho certificado.

Que por lo anterior, esta Secretaría emite la certificación del registro del libro de operaciones No. 351 del 16 de junio de 2008, aclarando que la Industria Forestal no ha presentado copia de los permisos de importación de Chapilla de conformidad con lo ordenado.

Que mediante oficio radicado No. 2009EE8564 del 20 de febrero de 2009 se requirió al señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, para que presentara los documentos que ampararon la importación y posterior movilización de 112.971,72 m<sup>2</sup> de Chapilla de madera reportadas en los radicados No. 2008ER29300, 2008ER29299 del 14 de julio de 2008 y los radicados No. 2009ER4123, 2009ER4123 del 30 de enero de 2009.

Que la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre emitió Concepto Técnico No. 7839 del 20 de abril de 2009, con el objetivo de hacer seguimiento a los requerimientos No. 2009EE8564 del 20 de febrero de 2009 y 2007ER22870 del 15 de agosto de 2007, en el cual señaló:

- *“No dio cumplimiento al requerimiento 2007ER22870 del 15 de agosto de 2007, ya que no presentó copias de los permisos “no CITES” expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que ampararon la importación legal de los productos comercializados por la industria.*
- *No dio cumplimiento al requerimiento 2009EE8564 del 20 de febrero de 2009, ya que no presentó los permisos “no CITES” y los salvoconductos de movilización que ampara la importación legal y posterior movilización de 112.971.72 m<sup>2</sup> de chapilla de madera. Incumpliendo con lo establecido en la Resolución No. 1367 de 2000. (...)”*

Que la secretaria Distrital de Ambiente – SDA, mediante Auto No. 3183 del 29 de abril de 2010 decidió iniciar proceso administrativo de carácter ambiental al señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, identificada con Nit No.

19.429.01502 ubicado en la Calle 78 No. 51 – 16 de la localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá D.C., el cual fue notificado de manera personal el día 30 de agosto de 2010.

Revisado el expediente, se determinó que para la fecha en que se realizó el Concepto Técnico No. 7839, es decir, el día 20 de abril de 2009, se encontraba en vigencia el Decreto 1594 de 1984, sin embargo, el acto administrativo referenciado fue proyectado erróneamente bajo la Ley 1333 de 2009.

De acuerdo con lo anterior, se observa una indebida aplicación de la norma toda vez que para la fecha de los hechos se encontraba vigente el Decreto 1594 de 1984, y no la Ley 1333 de 2009, norma que sirvió de soporte para iniciar el proceso sancionatorio; por lo que se analizará si operó el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

Teniendo en cuenta que la situación irregular que dio origen a las presentes diligencias es de ejecución continuada cuyo último acto materializado que se evidencia es Concepto Técnico No. 7839 del 20 de abril de 2009 mediante el cual se requiere al señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, los cuales sirvieron de fundamento para proferir el Auto No. 3183 del 29 de abril de 2010, mediante el cual se decidió iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, ubicado en la Calle 78 No. 51 – 16 de la localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá D.C., pronunciamientos éstos emitidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, resulta procedente establecer como primera medida, que la normativa aplicable al presente caso es la prevista en el Decreto 1594 de 1984.

A partir de lo expuesto, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso ocurrieron antes de la entrada en vigor de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

*“Artículo 64. Transición de procedimientos. El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención, razón por la cual se concluye que en el caso bajo exámen, es aplicable el procedimiento establecido en dicha normatividad.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

*"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

***Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones". (...)** (Subrayado y negrillas fuera de texto).*

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que en el presente caso esta Secretaría conoció del hecho irregular el día **20 de abril de 2009**, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en su lugar, regía el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado antes del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar

aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *“nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente”*, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**.

Frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

*“Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.*

*En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:*

*“Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...)”*

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

*“(…) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)”*

Al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(…) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) \*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que esta Secretaría, disponía de un término de **tres (3) años**, contados a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, esto es desde la fecha en que se efectuó el **Concepto Técnico No. 7829 del 20 de abril de 2009**, los cuales sirvieron de fundamento para proferir el Auto No. 3183 del 29 de abril de 2010, mediante el cual se decidió iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales; por lo que disponía hasta el día **20 de abril de 2012**, para la expedición del Acto Administrativo que resolvería de fondo la Actuación Administrativa frente al proceso sancionatorio y trámite que no se surtió; por lo anterior, de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

Por lo tanto, esta Resolución procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y en consecuencia ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2009-1221**.

Por último, la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, artículo 308, dispone:

**“RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA.** *El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.*

*Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.*

*Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.*

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo que concluye mediante el presente acto administrativo dio inicio en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, se -mantendrá dicho procedimiento hasta el final de la presente actuación administrativa.

### III. PROCEDIMIENTO DE EXPEDIENTES

Se trae a colación, lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, señala:

**“(…) ARTÍCULO 116. DESGLOSES.** *Los documentos podrán desglosarse del expediente y entregarse a quien los haya presentado, una vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha, todo con sujeción a las siguientes reglas y por orden del juez:*

*(…) 4. En el expediente se dejará una reproducción del documento desglosado.*

Así mismo, el artículo 122 de la misma norma, establece:

**“(…) ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES.** *De cada proceso en curso se formará un expediente, en el que se insertará la demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. ...”*

En razón a que la documentación de un expediente constituye una unidad archivística, deberá numerarse consecutiva y cronológicamente de acuerdo con la fecha de la recepción a fin de encontrar un orden coherente.

Las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos en virtud del cumplimiento del principio de celeridad y tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,

removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias de conformidad con el principio de eficacia.

La Secretaría Distrital de Ambiente, expidió la Resolución No. 03663 del 26 de diciembre de 2017 “*Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 686 de 2017, Resolución 2327 de 2015, la Resolución 6681 de 2011 y la Resolución 2306 de 2014 del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente, y se toman otras determinaciones.*”

El artículo 4 de la citada Resolución dispone:

**“(...) ARTÍCULO 4.** – *Modificar el artículo sexto de la Resolución 686 del 30 de marzo de 2017, en el sentido de derogar la versión 8.0 y adoptar la versión 9.0 del procedimiento que se enuncia a continuación:*

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSION</b>
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Administración de Expedientes	126PM04- PR53	9.0

Conforme al procedimiento interno con código 126PM04-PR53 versión 9, esta entidad resalta las modificaciones de gestión realizadas, respecto a la aplicación de la siguiente metodología:

*“(...) Establecer las actividades necesarias para el archivo, administración y custodia de los documentos que reciben (radicados externos e internos) y que generan la Dirección de Control Ambiental y sus cuatro subdirecciones (SSFFS, SRHS, SCAAV y SCASP), con destino al archivo de gestión (expedientes administrativos, expedientes permisivos y expedientes sancionatorios), de estas dependencias.”*

*(...) En esta versión el alcance es: El procedimiento inicia con el recibo de la correspondencia en físico que llega asignada a la Dirección de Control Ambiental y sus cuatro subdirecciones (SSFFS, SRHS, SCAAV y SCASP), sea esta de procedencia interna o externa. Y termina con el archivo documental conforme lo establece la TRD, incluida la administración y la custodia de los documentos, hasta la transferencia de la unidad archivística al archivo central.*

*Al ampliar el alcance el producto se amplió y en consecuencia se modificó. En la versión 8 el producto era: Expediente actualizado, administrado y custodiado.”*

Dicho lo anterior, esta Entidad cuenta con las herramientas necesarias para organizar los expedientes 08, y los documentos que reposen en los mismos, siendo así que, dado que los inicios de procesos sancionatorios se comprenden desde el recibo de correspondencia, (conceptos técnicos con sus actas de visita o documentos externos), se deberá hacer la gestión necesaria para aperturar los expedientes, garantizar el debido proceso y evitar la duplicidad de investigaciones en una misma carpeta.

De acuerdo con lo señalado en los antecedentes y dado que en el expediente **SDA-08-2009-1221** se adelantan diligencias que son objeto de control en materia de Flora e Industria de la Madera, esta entidad encuentra necesario realizar el desglose de los documentos que se relacionan a continuación, con el fin de aperturar un nuevo Expediente con la Numeración 08, y se dé continuidad al proceso adelantando en contra del señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**; los documentos son los siguientes:

- Documentos relacionados en el expediente **SDA-08-2009-1221**:

1	<b>el Concepto Técnico No. 10357 del 22 de junio de 2010</b>
2	<b>el Concepto Técnico No. 3276 del 6 de abril de 2015</b>
3	<b>el Concepto Técnico No. 224 del 6 de enero de 2016</b>

#### **IV. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA**

En relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la cual se le asignó, entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

En virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

De conformidad con lo contemplado en el Numeral 6° del Artículo Segundo de la Resolución 1865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente, *“Por la cual se reasumen funciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones”* corresponde a la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaria *“6. Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios”*.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria, de los hechos conocidos hasta el 20 de abril de 2009, fecha en que se efectuó el Concepto Técnico No. 7829 del 20 de abril de 2009, los cuales sirvieron de fundamento para proferir el **Auto No. 3183 del 29 de abril de 2010**, mediante el cual se decidió iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en su condición de representante legal de la Industria Forestal **DIMITRI YEPES.COM**, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Ordenar al Grupo Interno de Expedientes el **DESGLOSE** de los siguientes documentos, que se encuentran contenidos en el expediente **SDA-08-2009-1221**, con el fin de aperturar un nuevo expediente con la numeración 08, y son los siguientes:

1	<b>el Concepto Técnico No. 10357 del 22 de junio de 2010</b>
2	<b>el Concepto Técnico No. 3276 del 6 de abril de 2015</b>
3	<b>el Concepto Técnico No. 224 del 6 de enero de 2016</b>

**ARTÍCULO TERCERO.** - Ordenar la apertura de un nuevo expediente con la codificación SANCIONATORIO – 08, para el señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en calidad de propietario del establecimiento denominado **DIMITRI YEPEZ.COM** e incorporar los documentos señalados en el Artículo Segundo del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Notificar el contenido de la presente resolución al señor **RUBEN DIMITRI YEPES DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.429.015 de Bogotá, en calidad de propietario del establecimiento denominado **DIMITRI YEPEZ.COM**, en la dirección Calle 78 N. 51 – 26, en la Localidad de Barrios Unidos de la Ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

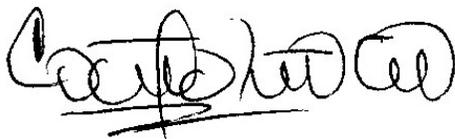
**ARTÍCULO QUINTO.** - Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Control Disciplinario Interno de esta entidad, para lo de su competencia. Se remitirá en consecuencia copia del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Publicar la presente resolución en el Boletín Legal Ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SEPTIMO.** - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, al correo electrónico [procesosjudiciales@procuraduria.gov.co](mailto:procesosjudiciales@procuraduria.gov.co).

**ARTÍCULO OCTAVO.** - Ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-1221**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

**ARTÍCULO NOVENO.** - Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual se deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (05) días subsiguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

INGRID LIZETH CULMA REINOSO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20220310 DE 2022	FECHA EJECUCION:	10/02/2022
-----------------------------	------	---------------------------------------	------------------	------------

**Revisó:**

ADRIANA PAOLA RONDON GARCIA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20221401 2022	FECHA EJECUCION:	24/03/2022
-----------------------------	------	------------------------------------	------------------	------------

ADRIANA PAOLA RONDON GARCIA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20221401 2022	FECHA EJECUCION:	03/03/2022
-----------------------------	------	------------------------------------	------------------	------------

INGRID LIZETH CULMA REINOSO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20220310 DE 2022	FECHA EJECUCION:	23/03/2022
-----------------------------	------	---------------------------------------	------------------	------------

ADRIANA PAOLA RONDON GARCIA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20221401 2022	FECHA EJECUCION:	23/03/2022
-----------------------------	------	------------------------------------	------------------	------------

**Aprobó:**

**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	24/03/2022
---------------------------------	------	-------------	------------------	------------